



NO MÁS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA

En lo que va del 2019, han sido asesinados 7 líderes sociales en nuestro país:

1. Jesús Adier Perafán de Caicedonia (Valle del Cauca)
2. Gilberto Valencia de Suárez (Cauca).
3. Wilmer Antonio Miranda en el municipio Cajibío (Cauca).
4. José Rafael Solano en la vereda El Jobo (Antioquia)
5. Wilson Pérez Ascanio, quien lideraba varios procesos sociales en la vereda El Cerro, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander).
6. Maritza Quiroz, lideresa social en Santa Marta, fue asesinada el pasado 5 de enero en la vereda San Isidro en la Sierra Nevada. Era suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres afro de desplazamiento en la zona rural. Hacía parte de los proyectos en zona rural de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT.
7. Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio la Victoria –Municipio de Cartagena de Chairá- Caquetá.

El asesinato de dirigentes y líderes sociales campesinos, indígenas, afrocolombianos tienen sistematicidad: personas de oposición política al régimen y reclamantes de tierras, defensa de territorios étnicos, oposición a la expansión de la minería y la agroindustria, denuncias del problema de la tierra o reclamos sobre ésta -históricamente han luchado por una reforma agraria democrática e integral en Colombia -, implementación de los acuerdos de paz con las FARC y la Comisión de la Verdad, el señalamiento y la estigmatización; sin duda alguna, es la expresión del cierre de espacios democráticos y políticos por parte del gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque.

La situación de la Fiscalía General de la Nación hoy con Néstor Humberto Matínéz, es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia, en donde la impunidad frente a la violación de los derechos humanos -no solo, para la captura de los autores materiales, sino principalmente de los autores intelectuales-, y la corrupción, clientelismo en el país no tienen límites.

Nuestra exigencia a los poderes del Estado colombiano es a que garanticen la vida, el derecho a la movilización, lucha social, libertad sindical y a la oposición política en Colombia. Lo anterior implica no solo la protección y las medidas administrativas por parte de las autoridades competentes del Estado, sino también las garantías necesarias y suficientes para las organizaciones sociales y sus dirigentes.

Que la desigualdad social, la corrupción, la impunidad y la falta de garantías para el ejercicio cotidiano de los derechos humanos fundamentales, no se impongan en el país, lo cual significa que el escenario que hoy se nos plantea, no solo en el mundo laboral sino también en la situación social y económica de nuestro país, son las calles con la resistencia, la lucha y la movilización social. Nuestro propósito es avanzar por una auténtica democracia, bienestar para todos y por un gobierno y país soberano.

¡El problema para el gobierno de Iván Duque es Venezuela y Nicaragua y NO el exterminio de líderes sociales, la corrupción y la desigualdad social en Colombia!

LOS PROFES

NUEVOS MAESTROS POR LA EDUCACIÓN

Somos Equipo, Somos Propuesta

Bogotá, enero 11 de 2019.